

Entrevista con Manuel Sarmiento, candidato del Polo Democrático Alternativo al Concejo de Bogotá

“Un equipo de investigadores de la revista habló con Manuel Sarmiento sobre los problemas de la ciudad. El candidato, colaborador de vieja data de *Deslinde*, y ex asesor del senador Jorge Enrique Robledo, trató cada uno de los problemas que se le propusieron con un conocimiento técnico que demuestra su preparación, su postura democrática y su conocimiento de la ciudad. **Deslinde**

manusarmiento@gmail.com

Deslinde: Denos una opinión general sobre los indicadores sociales en Bogotá.

Manuel Sarmiento: En los últimos años hubo ciertos avances en educación, salud y alimentación. Sin embargo, los programas sociales han sido insuficientes para corregir los problemas de pobreza y desigualdad porque no se reversaron políticas que vienen desde Mockus y Peñalosa, con las cuales se construyó un modelo de ciudad donde el 1 o 2% de la población se enriquece con el empobrecimiento de la gran mayoría. Los niveles de desigualdad son pavorosos: el 42% de los ingresos de la ciudad se concentra en solo el 10% de la población, mientras que el 10% de los más pobres apenas se queda con el 1% de los ingresos totales. Es una ciudad donde constantemente se les niegan derechos a los ciudadanos. Se trata del modelo Transmilenio que se ha impuesto en todos los asuntos de Bogotá, en el que unos cuantos se enriquecen con los derechos ciudadanos.

D: ¿En qué consiste este modelo Transmilenio?

MS: Es un modelo en donde el interés particular de cacahos nacionales y extranjeros prevalece sobre el interés general. Peñalosa entregó el transporte público a un oligopolio conformado por cerca de veinte familias, que también controlan el SITP. Esas familias se enriquecen con una de las tarifas más caras de América Latina y con recursos públicos que el Distrito les transfiere, porque los contratos les garantizan unas ganancias que no alcanzan a pagarse con los pasajes. Desde el 2012, el

gobierno les ha girado 1,2 billones de pesos, recursos que salen de los impuestos que pagan los ciudadanos. A cambio, los usuarios reciben un pésimo servicio que, repito, es uno de los más caros de la región. Este modelo Transmilenio, en el que unos cuantos se enriquecen con el empobrecimiento de la mayoría, es el que se aplica en la energía eléctrica, el agua, el saneamiento básico, la salud, la educación, el ordenamiento territorial y en todos los temas de importancia en la capital.

D: ¿Qué soluciones plantearía Ud. en el Concejo para el transporte público?

MS: Una ciudad de más de 7 millones de habitantes tiene que tener un metro. En el mundo solo hay tres ciudades con 7 millones de habitantes que no tienen metro; dos quedan en África, la tercera es Bogotá. Se necesita un sistema de alta velocidad, que no utilice semáforos y que tenga la capacidad para movilizar más de 40 mil pasajeros hora-sentido de manera cómoda y rápida. Me preocupa que haya varias voces señalando una posible privatización del metro, es decir, quieren trasladar el modelo Transmilenio al futuro metro de Bogotá. Este sistema debe ser público y subsidiado, como funciona en ciudades como Londres, Nueva York y Ciudad de México. También se deben renegociar los contratos de Transmilenio y del SITP, pues es la única forma de reducir las tarifas y mejorar el servicio. El servicio de transporte debe ser un derecho, no el negocio de unos cuantos.

D: ¿Qué problemas ve en la política de vivienda?

MS: El primer problema es el precio de la vivienda, que en los últimos 10 años ha aumentado en un 160%. Esto se debe a la especulación inmobiliaria, que lesiona el derecho a acceder a una vivienda. En Bogotá han aumentado los hogares que viven en arriendo porque los precios de la vivienda están por las nubes. El Distrito debe intervenir el precio del suelo para controlar esta especulación. Otro problema son los planes de renovación urbana que se pretenden implementar, los cuales apuntan a desplazar a miles de hogares pobres y de clase media para favorecer a negociantes inmobiliarios. Es el caso de proyectos como Ministerios y la renovación del CAN, que incluso afectan a la Universidad Nacional al quitarle parte de sus predios, incluido uno en el que se está construyendo el Hospital Universitario Santa Rosa, lo que agrava la crisis de la salud.

D: ¿Cómo ha impactado la crisis de la salud a Bogotá?

MS: El sistema de la Ley 100 es perverso; las EPS se enriquecen con la enfermedad y la muerte de los ciudadanos. En Bogotá, las EPS les deben más de 600 mil millones de pesos a los hospitales públicos, y el gobierno de Gustavo Petro ha cerrado 1.500 servicios de salud en los últimos dos años. El gobierno distrital también ha descargado la crisis sobre los trabajadores. En los 22 hospitales públicos de la ciudad,

el 80% de los funcionarios están tercerizados. El Distrito debe exigir el pago de las deudas de las EPS, y desde el Concejo promoveré la organización de pacientes y trabajadores para fortalecer la lucha por un nuevo sistema de salud sin EPS.

D: ¿Qué está proponiendo para defender los derechos de los trabajadores del Distrito?

MS: Tres cosas. En primer lugar, acompañar la lucha contra la tercerización. Es inaceptable que en empresas como ETB haya cuatro trabajadores tercerizados por cada trabajador directo. En las entidades del sector central, los funcionarios deben estar vinculados a las plantas de personal. Hoy la mayoría están contratados por OPS. Y finalmente, se debe respetar el derecho al trabajo de los vendedores informales, quienes son víctimas de persecuciones arbitrarias por parte de la administración distrital.

Peñalosa entregó el transporte público a un oligopolio conformado por cerca de veinte familias, que también controlan el SITP.

D: ¿Cómo ve la economía de Bogotá?

MS: Bogotá es víctima de la política de libre comercio y de los TLC de Juan Manuel Santos. La industria está prácticamente quebrada, lleva tres años con crecimientos negativos. Este primer trimestre del 2015, la industria bogotana cayó un 4% y sigue en picada. Hay que ir al Restrepo o a la zona industrial de Puente Aranda: las antiguas fábricas quedaron convertidas en salones de belleza. El comercio está quedando en manos de un oligopolio que desplaza a los pequeños y medianos comerciantes. Sin modificar este tipo de

políticas que destruyen el empleo formal y la capacidad de la ciudad para producir la riqueza que se necesita con el fin de satisfacer las necesidades de sus habitantes y sacarlos de la trampa de la pobreza, no se hace nada. Es necesario cambiar el modelo económico que han impuesto Santos y los gobiernos anteriores.

D: ¿Por qué los empresarios y trabajadores bogotanos no pueden competir con las potencias del mundo?

MS: La competitividad de una economía no solo depende de los empresarios y los trabajadores, pues el Estado debe garantizar condiciones para competir. La industria bogotana no puede competir con potencias como Corea, porque los costos de la energía son unos de los más altos del continente. La tarifa de Codensa es más cara que la de Estados Unidos, y en estas condiciones es imposible competir. Por eso, desde el Concejo acompañaré los reclamos de los empresarios para exigirle al gobierno que cambie la fórmula tarifaria.

D: ¿Qué se debe hacer para mejorar la educación en Bogotá?

Bogotá es víctima de la política de libre comercio y de los TLC de Juan Manuel Santos.

MS: En los colegios públicos la jornada escolar es de apenas seis horas, lo que lesiona la calidad de la educación. El programa 40 x 40 de Gustavo Petro es un remedo, bastante malo, de la jornada única, porque lo que hace es darles a los estudiantes dos horas adicionales para que ocupen su tiempo libre, pero no para lograr la excelencia académica. Para implementar la jornada única se necesita más infraestructura, que se ejecute el presupuesto de manera adecuada y

progresivamente llegar a una cobertura del 100% de la jornada única. Y se debe hacer con profesores vinculados a la planta de la Secretaría de Salud, con todas las garantías laborales, porque en el programa 40 x 40 los docentes están contratados por prestación de servicios, sin garantías laborales. Frente a la Universidad Distrital, la política actual es desmembrarla, y convertirla poco a poco en una institución que se reduzca a formar a los jóvenes en competencias, en simples habilidades, no en formar ciudadanos críticos que puedan innovar el conocimiento. La Universidad Distrital debe contar con todo el presupuesto tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital para ser una verdadera universidad, o sea, un centro de investigación, de desarrollo de la ciencia. Para resolver ese problema hay que exigirle al gobierno nacional que financie las universidades públicas que existen en Bogotá: la Distrital, la Nacional – que se está cayendo a pedazos–, la Pedagógica y el Colegio Mayor de Cundinamarca.

D: ¿Qué opina sobre la inseguridad en Bogotá?

MS: Es uno de los grandes problemas de la ciudad. Considero que se debe trabajar en tres asuntos. Primero, mejorar las condiciones socioeconómicas de la capital. Segundo, lograr que las instituciones funcionen. Es inaceptable que se conozca los sitios donde actúan las ollas y las autoridades no hagan nada. Tercero, se debe mejorar la infraestructura de la ciudad; especialmente el alumbrado público, servicio que opera Codensa y por el cual pagamos más de 130 mil millones de pesos. Es muy grave que esta empresa, cuyo presidente es el hermano de Germán Vargas Lleras, no esté reemplazando las bombillas viejas, lo que deteriora la iluminación y la seguridad.

D: Por último: Bogotá en este momento es la segunda ciudad más contaminada en Latinoamérica después de Ciudad de México, ¿qué opina de esto?

MS: La estructura ecológica principal de la ciudad está amenazada por las políticas que privilegian a los grandes negociantes del suelo. No se deben permitir las megaconstrucciones en los Cerros Orientales, como tampoco se deben autorizar

licencias de construcción en o cerca de los humedales. El caso del Río Bogotá es otro ejemplo del modelo Transmilenio. El proyecto de descontaminación favorece a Engasa, sin embargo son los ciudadanos quienes deberán financiar el proyecto. También se deben reversar las políticas de privatización del servicio de acueducto, como el caso de la concesión de Tibitoc, contrato mediante el cual los bogotanos han pagado a un poderoso consorcio privado 300 millones de metros cúbicos de agua no consumidos.

Deslinde